

## Capítulo 2

# Milpas airadas: hacia la autosuficiencia alimentaria y la soberanía laboral

Armando Bartra

*De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne;  
de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas  
del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne  
de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados.*

POPOL VUH

*Patria: tu superficie es el maíz.*

RAMÓN LÓPEZ VELARDE, *Suave patria*

EL *POPOL VUH* y la *Suave patria*, textos emblemáticos del México indígena y del México mestizo, sugieren enfáticamente que el campo mexicano es mucho más que una gran fábrica de alimentos y materias primas para la industria. Los campesinos no sólo cosechan maíz, frijol, chile o café, también cosechan aire limpio, agua pura y tierra fértil; diversidad biológica, societaria y cultural; pluralidad de paisajes, olores, texturas y sabores; variedad de guisos, peinados e indumentarias; sin fin de rezos, sones, cantos y bailes; los campesinos cosechan la inagotable muchedumbre de usos y costumbres que los mexicanos somos.

Aunque le pese a los mercadócratas, el mundo rural no se agota en la producción de mercancías, es también y ante todo naturaleza, convivencia, cultura. Y si Europa comienza a reconocer los valores no convencionales de sus campos roturados, cuantimás nosotros: una sociedad con un cuarto de su población viviendo y trabajando en el medio rural, una nación de poderosa herencia indígena asentada mayormente en la comunidad agraria, un territorio megadiverso poblado por incontables plantas, animales y microorganismos, muchos de ellos endémicos.

Durante la llamada *ronda del milenio* para las negociaciones agrícolas de la Unión Europea (UE), celebrada en marzo de 2000, los ministros del ramo definieron una agenda fundada en el reconocimiento de que: “La agricultura desempeña, además de la producción de alimentos, múltiples funciones, entre

ellas: la preservación del paisaje, la protección ambiental, la seguridad y calidad de los alimentos, el bienestar de los animales, y otros, por lo que urge equilibrar los aspectos comerciales y no comerciales de la agricultura.” Sobre esta base diseñaron una serie de *medidas complementarias* a la reforma de 1992, que consideran subsidios a los labradores ubicados en zonas desfavorecidas, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos agrícolas, conservar el hábitat y cumplir con las normas ambientales. Se prevé, también, la capacitación de los trabajadores del campo en tecnologías ecológicas, el apoyo a los jóvenes que quieran iniciarse en la producción agrícola, la jubilación anticipada a los labriegos mayores de 55 años y compensaciones para quienes deseen convertir sus explotaciones agropecuarias en zonas silvícolas o reservas biológicas.

Cierto, la poderosa economía europea puede darse el lujo de subsidiar a un sector relativamente modesto de su producción y su sociedad. Y también es verdad que como gran exportadora de alimentos, la UE busca ampliar mercados reduciendo barreras arancelarias y subsidios en otros países, y en esta tesitura le conviene introducir en su propia agricultura un sistema de subvenciones que presuntamente no distorsiona los precios pues va orientado a retribuir los valores sociales y ambientales. Pero, aun así, el enfoque europeo es mucho más creativo y sugerente que el crudo imperialismo alimentario estadounidense: una sorda guerra mundial anticampesina que usa los subsidios para abatir los precios y poder vender a precios de *dumping*. Tiene razón Franz Fischler, comisario europeo para la Agricultura y la Pesca, cuando dice: “Precisamente cuando todos los países industrializados han aceptado orientar sus ayudas a la agricultura de manera que no se traduzca en medidas distorsionadas para el comercio y la producción, Estados Unidos avanza en dirección opuesta.”

Importante para Europa y en general para el primer mundo, el reconocimiento, ponderación y retribución de los bienes y servicios ambientales y sociales de la agricultura, es indispensable en naciones orilleras como la nuestra. Sociedades rencas donde la mengua de la producción agropecuaria respecto de la total no condujo a una reducción semejante en la población económicamente activa, de modo que la productividad y retribución del trabajo rural se desplomaron. Países cuyo campo es territorio de exclusión societaria y crisis ambiental; zona de desastre que los jóvenes desertan, no hacia una industria y unos servicios que en las últimas décadas apenas han crecido, sino rumbo a la precariedad urbana y la incierta migración indocumentada.

Necesitamos un nuevo acuerdo entre el mundo urbano y el mundo rural. No el advenimiento del pasado netamente agrario y un presunto futuro puramente industrial, sino la apuesta por un porvenir habitable donde la historia social prolongue y trascienda la historia natural en vez de interrumpirla catastróficamente.

## ¡El campo no aguanta más!

Al grito de ¡El campo no aguanta más!, el 31 de enero de 2003, 100,000 personas, principalmente campesinos provenientes de todos los estados de la República, tomaron la ciudad de México al grito de “¡El campo no aguanta más!”.

Pero esa manifestación no fue la primera ni será la última. Durante todo el 2002 se habían multiplicado las acciones de maiceros, sorgueros, frijoleros, cafetaleros, cañeros, piñeros, ganaderos, deudores rurales. Y el 3 de diciembre la movilización llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde 2,500 campesinos expusieron su problemática ante los diputados del PRD y del PRI, para marchar después a la embajada de los Estados Unidos, el país que con su política agrícola y su prepotencia imperial es el mayor causante externo de nuestra crisis rural.

Las movilizaciones campesinas de finales del 2002 y principios del 2003 fueron convocadas por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), el Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), la Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (UNOFC), el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC) y la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), así como el Barzón Nacional. A ellos se sumó de manera tardía el Congreso Agrario Permanente (CAP), y también la Confederación Nacional Campesina (CNC), aunque ésta lo hizo negociando por separado para preservar su declinante imagen protagónica.

Las demandas de los trabajadores rurales se resumen en una plataforma común titulada *Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano*, donde se plantea:

1. Moratoria al apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
2. Un programa emergente para reactivar de inmediato el campo y otro de largo plazo para reorientar al sector agropecuario.
3. Verdadera reforma financiera rural.
4. Un presupuesto para el año 2003, donde se destine cuando menos el 1.5 por ciento del producto interno bruto al desarrollo productivo del campo y otro tanto para el desarrollo social rural.

5. Política alimentaria que garantice a los consumidores que los bienes agrícolas son inocuos y de calidad.
6. Reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indios.

La movilización campesina contó con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Pero además, el programa –firmado por más de 12 organizaciones sociales– tiene el respaldo explícito del Partido de la Revolución Democrática y de sus bancadas legislativas. Adicionalmente, encontró entre diputados y senadores una actitud favorable a las demandas campesinas, tanto en lo tocante a incrementar la asignación presupuestal agropecuaria en la Ley de Egresos del 2003, como en lo referente a una Ley de Energía que otorgue subsidios al diésel y la electricidad de uso agrícola, y en reformas a la Ley de Comercio Exterior que protejan legalmente a los productores nacionales frente a las importaciones provenientes del norte. Hubo también, entre algunos legisladores, posiciones favorables a la revisión y renegociación del TLCAN en materia agropecuaria. Disposición que, a regañadientes, también expresaron algunos secretarios de Estado.

Hoy, como nunca, los campesinos mexicanos batallan por su vida. En el arranque del nuevo milenio los trabajadores rurales de todos los rumbos y todos los sectores se afanan por tener futuro; por un país donde quepan las comunidades agrarias; por un modelo de desarrollo con soberanía alimentaria y soberanía laboral. Y no es una lucha cualquiera, es un combate por la propia existencia. Si son derrotados, en los próximos meses la situación de desastre que ya aqueja a cerealeros, productores de oleaginosas, cafetaleros, cañeros, piñeros, tabacaleros y demás, abarcará a los avicultores, a los porcicultores, a los silvicultores..., se extenderá, en fin, a todos y cada uno de los sectores rurales. De seguir así las cosas, en unos cuantos años el campo mexicano, que ya es zona de desastre, devendrá un páramo agropecuario y también un páramo social.

Y el destino de los campesinos es el destino de todos los mexicanos. No sólo porque la devastación rural se extiende dramáticamente a las ciudades a través de la migración, sino también porque un país incapaz de producir sus propios alimentos y de generar empleos estables y dignos para todos, es una nación minusválida y arrodillada frente al imperio. Un pueblo sin futuro.

### **Breve historia del colapso**

El desastre tiene historia. En los sesenta éramos 35 millones de mexicanos, la mitad urbanos y la mitad rurales. En las cuatro décadas siguientes los 17 millo-

nes de campesinos se transformaron en 24 millones, pero la población de las ciudades creció mucho más y hoy son urbanos unos 75 millones de compatriotas. Así, en los últimos 40 años los labriegos aumentaron en números absolutos pero decrecieron en términos relativos, y el país se urbanizó.

En el arranque del milenio uno de cada cuatro mexicanos vive en el campo en poblaciones de menos de 2,500 habitantes, aunque en términos productivos sólo uno de cada cinco de los económicamente activos se ocupa en actividades agropecuarias. Sin embargo ésta aún significativa ruralidad demográfica y laboral, que abarca alrededor de 25 millones de personas, no tiene un proporcional correlato económico, pues en el tránsito del milenio el sector agropecuario apenas aporta alrededor del 5 por ciento del producto interno bruto. Proporción que se ha venido reduciendo, pues en 1992 aún era del 7.3 por ciento.

Esto nos remite al sesgo antiagrícola de los precios y la bajísima productividad relativa del trabajo rural, pero nos habla también de la falta de opciones en la industria y los servicios para una mano de obra agropecuaria que, pese a sus bajos rendimientos económicos, pocos y malos empleos e ínfimos ingresos, se mantiene varada en el campo.

Y es que según el último censo agropecuario, nueve de cada 10 agricultores son en mayor o menor medida autoconsuntivos, y de éstos sólo cuatro concurren además al mercado con algunos excedentes o con la parte de su producción correspondiente a materias primas (café, caña de azúcar, cacao, tabaco, copra, etcétera). Lo que significa que nuestra agricultura produce más subsistencia que cosechas comerciales; en vez de una función económica relevante desempeña un sustantivo cometido social.

En el arranque del tercer milenio la agricultura mexicana está conformada por unos cuatro y medio millones de unidades de producción, de los cuales tres millones corresponden al sector reformado (ejidatarios o comuneros) y el resto son propietarios privados. Pero de estos últimos apenas unos 15,000 poseen empresas grandes, que concentran casi la mitad del valor de la producción rural, y quizá otros 150,000 tienen empresas pequeñas. El resto, incluyendo ejidatarios y comuneros, son minifundios de subsistencia, puramente autoconsuntivos o parcialmente comerciales. De éstos, menos de la tercera parte genera ingresos agropecuarios suficientes para vivir, y más de la mitad obtiene la mayor parte de su ingreso de actividades desarrolladas fuera de su parcela.

Y si la agricultura mexicana tiene un raquítico desempeño económico, también tiene un mal desempeño social, pues la subsistencia que produce está en los niveles más bajos de bienestar. En el campo ocho de cada 10 personas son pobres y de éstas, seis o siete son miserables. De modo que, pese a que sólo una cuarta parte de la población mexicana es rural, dos terceras partes de las personas en pobreza extrema viven ahí.

Los campesinos siempre han sido pobres, pero en los tres últimos lustros las políticas públicas mercadócratas han causado a propósito la ruina del México rural. Con el argumento de que la enorme mayoría de los pequeños productores agrícolas es redundante por no competitiva, desde los ochenta se emprende el drenaje poblacional, la purga demográfica que debía librar al congestionado campo mexicano de unos tres millones de labradores sobrantes; exonerar al agro de más de 15 millones de personas que estaban de más. ¿Que dónde irían estos desahuciados? A los planeadores neoliberales el destino de los despedidos de la empresa rural que ellos administraban les importaba poco. Pero si se insistía, alegaban que los ex campesinos encontrarían empleo en la industria, el comercio y otros servicios, para los que anunciaban en los ochenta y los noventa un crecimiento de entre el 6 y el 7 por ciento anual. Como todos sabemos, durante los años del túnel –donde aún estamos– la economía mexicana prácticamente no ha crecido y los expulsados acabaron en la marginalidad urbana, el comercio informal parasitario, la migración indocumentada; los afortunados encontraron empleo en las maquiladoras negreras, que en pleno tercer milenio reproducen el régimen fabril de la Inglaterra decimonónica.

El *redimensionamiento* genocida, vía una *reconversión* salvaje, se operó mediante cambios legales: reformas constitucionales como la del artículo 27, que dio fin al interminable reparto agrario y abrió las puertas a la privatización de la tierra ejidal e indirectamente de la comunal; pero también mediante una atrabancada y unilateral desregulación agropecuaria, una mudanza que debía potenciar nuestras ventajas comparativas con vistas en la globalidad. Y en efecto, la producción de frutas, hortalizas y otros cultivos exportables, le ganó terreno a la cosecha de básicos. Pero el saldo nefasto resultó mayor, pues en el mismo lapso las importaciones alimentarias crecieron exponencialmente, enrojeció la balanza comercial agropecuaria y se abismó el ingreso campesino.

Si la cruz de la que hoy penden los labriegos se venía construyendo desde los ochenta, los clavos se pusieron en 1994, cuando entró en vigor el TLCAN. En menos de una década las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pasaron de un muy alto 70 por ciento a un abrumador 90 por ciento, lo que nos ata por completo a los avatares de la economía estadounidense. Pero en el caso de la agricultura, el fenómeno más notable ha sido el impetuoso crecimiento de las importaciones, particularmente de granos. Así, mientras que entre 1987 y 1993 llegaron 52 millones de toneladas, entre 1994 y 1999 se compraron 90 millones. Un incremento de casi el 40 por ciento, que en el caso del maíz fue todavía mayor pues si en el primer lapso entraron 17 millones de toneladas en el segundo se compraron casi 30 millones, con un incremento cercano al 70 por ciento. El resultado fue que al terminar el siglo dependíamos de Estados Uni-

dos para el 60 por ciento del arroz, la mitad del trigo, el 43 por ciento del sorgo, el 23 por ciento del maíz y casi toda la soya.

Con esto México se sumó definitivamente al curso mundial de creciente dependencia alimentaria de los países periféricos respecto de los desarrollados. Y es que en el último medio siglo la producción planetaria de cereales prácticamente se triplicó, pero con un crecimiento concentrado en las metrópolis, donde hoy se producen alrededor de 0.7 toneladas de cereales per cápita frente a las 0.25 que se cosechan en los países atrasados.

Y la asimetría se profundizará con el nuevo Farm Bill estadounidense. La Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de Estados Unidos, aprobada por el Congreso de ese país en el 2002 y que tendrá vigencia por seis años, incrementa entre 70 y 80 por ciento los subsidios agrícolas, lo que puede significar la estratosférica cantidad de 183,000 millones de dólares. En concreto, la ley actualizada agrega nuevos productos, como la soya y algunas oleaginosas, a la lista de los que le permiten al agricultor recibir subsidios fijos; adiciona nuevas cosechas a la lista de las que recibirán pagos de compensación cuando el precio de mercado esté por debajo del fijado por el gobierno, además de incrementar el monto de este subsidio en alrededor de 5 por ciento; y por último establece compensaciones anticíclicas adicionales, que serán pagadas cuando el ingreso del agricultor, incluyendo los otros subsidios, no alcance un nivel predeterminado. Las subvenciones no propician la equidad entre los granjeros estadounidenses, pues mitad va a manos del 8 por ciento de los agricultores; pero en un país que envía al mercado mundial una de cada cuatro toneladas que cosecha —proporción que llega al 40 por ciento en el caso del trigo— estas transferencias revisten a sus exportaciones agrícolas de precios artificialmente bajos con los que no pueden competir otros granjeros menos subsidiados. Cotizaciones políticas, si las hay, que se transforman en armas coloniales al arruinar a los campesinos de los países orilleros, cuyos ingenuos gobiernos se tomaron en serio la especie de que había que suprimir por completo las subvenciones agropecuarias para no distorsionar el mercado.

Con respecto a México la nueva Farm Bill estadounidense no hace más que profundizar las asimetrías de nuestras agriculturas y remachar los clavos de la cruz, pues mientras que las subvenciones representan en promedio el 16 por ciento del ingreso de los agricultores mexicanos, en Estados Unidos representa ya el 23 por ciento. Y el daño se extenderá a todos los ámbitos: en términos de balanza comercial agropecuaria la previsible consecuencia será la reducción de nuestras exportaciones y el incremento de nuestras importaciones; en lo social el saldo será la ruina generalizada de los campesinos restantes; y en lo tocante a la seguridad nacional los efectos serán la completa pérdida de soberanía laboral y soberanía alimentaria.

Por si fuera poco el 1o. de enero de 2003 tendrá lugar un acontecimiento tan trascendente como el alzamiento zapatista del 1o. de enero de 1994, pero de signo contrario: para entonces todos los productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y Canadá podrán entrar a México libres de arancel. Estamos hablando de aves, puercos, ovinos, bovinos, trigo, arroz, cebada, café, papas, frutas de clima templado, entre otros, y derivados como embutidos, grasas, aceites, tabacos, por mencionar algunos. Ciertamente, quedarán todavía tres excepciones: el maíz, el frijol y la leche en polvo, que se liberarán íntegramente en el 2008. Pero no hay problema, la Secretaría de Economía acaba de fijar en 2'667,000 toneladas la cuota para importar maíz de Estados Unidos adicional a la que establece el TLCAN, con lo que se mantiene la política seguida desde 1994 de no cobrar arancel por las importaciones por encima de la cuota libre de impuesto.

Con todo esto los maiceros del país se están yendo por el caño. Tanto los que producen con riego y alta tecnología –pero también altos costos– en Sinaloa y otros estados del norte, como los productores de Jalisco, temporaleros y con razonables rendimientos. No es de extrañar, entonces, que en los últimos años la producción de este grano no haya aumentado, manteniéndose en 18 millones de toneladas, cantidad del todo insuficiente para satisfacer el consumo interno, en particular el pecuario y el industrial.

Son las ventajas comparativas, estúpido, dirían algunos. Todo se debe a que en términos agroecológicos México no es competitivo en la producción cerealera. Quizá. Pero por qué entonces también los productos agrícolas para los que tenemos evidente propensión andan bocabajeados. Por qué el gran cultivo del sur y el sureste, que es el café, va de tumbo en tumbo y sale de una crisis de precios para entrar en otra. Y eso que los huerteros están bien organizados, son innovadores tecnológicos que han hecho de México el mayor productor de café orgánico, incursionan desde hace rato en la comercialización y a mediados de los ochenta participaron destacadamente en la construcción del mercado justo. Pero aun así están al borde de la ruina. Quienes no han encontrado nichos comerciales que paguen más y trabajado en la línea del valor agregado, definitivamente no la hacen. Las zonas cafetaleras que en el pasado vivieron cierta holgura económica hoy se han sumado al éxodo poblacional. Los nuevos migrantes ya no provienen sólo de las áridas mixtecas o de la montaña guerrerense, hoy salen del otrora orgulloso Soconusco o del emporio cafetalero del centro de Veracruz.

La catástrofe del campo es una verdadera emergencia nacional. Las importaciones de maíz blanco y amarillo, que en la última década han fluctuado entre cinco y seis millones de toneladas anuales, están arruinando a los productores netamente comerciales del noroeste, pero también desvalorizan los exce-

dentes de los milperos más modestos y desalientan incluso la producción de autoconsumo, dejando un saldo de alrededor de tres millones de productores damnificados. La agroindustria cañera azucarera está en crisis, pues los Estados Unidos no aceptan las importaciones pactadas, alegando otros acuerdos, mientras que el edulcorante de alta fructuosa, comprado en Estados Unidos o hecho a base de maíz importado, desplaza al azúcar de caña como insumo de los refrescos embotellados. La entrada de arroz a precios de *dumping* tiene quebrados a los arroceros. El ingreso de piña enlatada golpea a los cosechadores de nacionales de Oaxaca y Veracruz. Y lo mismo sucede con la producción de leche y de carne acosadas por el polvo lácteo y los cortes de importación, y con los avicultores desplazados por el ingreso de carne de pollo de desecho proveniente de Estados Unidos; por no mencionar los problemas que aquejan a trigueros, arroceros, sorgueros y frijoleros. Si a esta debacle general agropecuaria agregamos el desmantelamiento de la cafecultura campesina, que sustenta a cerca de 400,000 productores y considerando pizcas y agroindustria da de comer a unos tres millones de personas, habrá que reconocer que estamos ante una emergencia máxima, un problema de seguridad nacional. Problema que se agrava con el fuerte incremento de los subsidios a la agricultura norteamericana que establece el nuevo Farm Bill, y empeorará el año próximo, cuando con base en los acuerdos del TLCAN se liberen de todo gravamen todas las importaciones agropecuarias restantes excepto leche en polvo, maíz y frijol. La eliminación del arancel significará, entre otras cosas, la posible pérdida de cientos de miles de empleos en la porcicultura y la apicultura.

Por si fuera poco hay claros síntomas de que el gobierno de Vicente Fox no tiene propuestas de fondo, y su respuesta última a las demandas es la recomendación machacona del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga: “atiendan a las señales del mercado muchachos”; como si los productores organizados no lo vinieran haciendo desde hace muchos años. Y peor aún, la respuesta gubernamental a los conflictos recientes tiene todos los visos de transformarse en una suerte de programa de salvamento bancario, en un Fobaproa rural. Porque así como se subsidió con dineros públicos a los grandes bancos y empresarios defraudadores con el conque de que había que proteger los pequeños ahorros, hoy se están canalizando recursos fiscales a sectores rurales adinerados –que son parte del problema y no de la solución– alegando que con esto se ayuda a los campesinos. El caso más evidente es la desviación de 1,200 millones, que debía manejar Acerca, entregados a los dueños de los ingenios azucareros –un sector históricamente parasitario– para que pudieran pagar la zafra que debían a los cañeros. Otro caso de subsidio indebido es la canalización de los recursos de Acerca destinados al transporte y almacenamiento, a empresas comercializadoras colosales como Cargill, que mueve casi la mitad de todos los granos y

que está interesada en moverlos todos, pues quiere comprar Silos Miguel Alemán, que aún maneja Sagarpa, y la Terminal Granelera de Veracruz, hoy concesionada a Almacenadora del Sur, instalaciones estratégicas que pondrían nuestra ya muy mermada seguridad y soberanía alimentarias en manos de una transnacional, que maneja más de 1,000 plantas de almacenamiento en 67 países del mundo. Y que decir de los subsidios al maíz resultantes de las recientes movilizaciones de Sinaloa, que en gran medida van a las comercializadoras, y cuya porción destinada efectivamente al productor agrícola, queda en manos de un sector maicero empresarial y de riego, mientras que dos millones y medio de los milperos campesinos que aportan tres cuartas partes de la producción nacional de este básico, no sólo están desprotegidos, también se cuestiona su existencia por no competitivos y por destinar parte de sus cosechas al autoconsumo o a los mercados locales. Otro caso es el del café, que vive una crisis profunda y prolongada y para el que se aprobaron recursos emergentes, pero mientras que la cuarta parte del subsidio es captado por unos 23,000 cafeticultores empresariales, con huertas de más de 5 hectáreas, al 95 por ciento de los productores –más de 300,000 familias campesinas e indígenas– les corresponderá apenas el 75 por ciento del recurso fiscal. Pero lo más grave de este Fobaproa rural, no es tanto que el subsidio se canalice a megacomercializadoras, dueños de ingenios y agricultores ricos, que en algunos casos son corresponsables de la emergencia que protagonizan. El problema mayor es que se trata de subsidios emergentes, dinero para apagar fuegos o negociar chantajes, ausente de verdaderos proyectos de recuperación agropecuaria.

En este contexto, hablar de emergencia nacional no es retórica. Ni siquiera exageración. Dejar a la intemperie a 25 millones de mexicanos que viven y trabajan en el campo, entre ellos en sector más pobre de la población y casi la totalidad de los indios, nos adentra en una catástrofe económica, social y ambiental de dimensiones colosales. Crisis de soberanía alimentaria, crisis terminal de soberanía laboral, crisis ecológica, y por último –que no al final– crisis sociopolítica, pues los descalabros agrícolas se han asociado históricamente con la aparición de guerrillas.

Por los siniestros de la *reconversión* se perdió la soberanía alimentaria. Pero lo más grave es que se extravió también la soberanía laboral; esto es, la capacidad de proporcionar trabajo digno e ingreso suficiente a la totalidad de los mexicanos. Un país pobre que no produce sus alimentos fundamentales, participa en desventaja en el juego de la globalidad, pues está obligado a comprar bienes de consumo básico cualesquiera que sean las condiciones del mercado. De la misma manera, una nación de éxodos masivos y estructurales, incapaz de aprovechar la capacidad laboral de todos sus habitantes, pone su soberanía en manos del país receptor de sus migrantes. México no es un país de la Unión Europea,

que ceda premeditadamente soberanía para intensificar la complementariedad virtuosa y enriquecedora; su dependencia alimentaria y laboral hace de México una nación disminuida y subordinada.

Ante la debacle agraria, frente a una emergencia nacional que se profundizará con la nueva Ley Agrícola estadounidense y la inminente desgravación de casi la totalidad de las importaciones agropecuarias provenientes del norte, al gobierno “del cambio” que sucedió a los del PRI sólo se le ocurren frases sonoras; planes y programas de nombres rimbombantes y escasa sustancia. A finales del 2002 el titular de la Secretaría de Economía y el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Acuicultura (Sagarpa), anunciaron un *blindaje agroalimentario*, enunciado del todo hueco cuando no se cuestiona en lo mínimo la apertura comercial y tampoco se cuenta con recursos suficientes para revirarles a nuestros desleales socios del norte con subsidios de magnitud comparable a los suyos. ¿Qué significa *blindaje* cuando se rechaza la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, mientras que de un gasto público programable fuertemente mermado, sólo una ínfima parte le corresponde al desarrollo rural?

Posteriormente el Presidente de la República encomió el presunto *blindaje agropecuario*, anunciando que en el 2003 el gobierno gastará en el campo 102,000 millones. Pero una vez más se trataba de palabras huecas, pues la cantidad es un agregado de todos los rubros presupuestales que tienen que ver con el medio rural, mientras que para Sagarpa, única secretaría que desarrolla acciones de fomento, se presupuestaron cerca de 34,000 millones, lo que representa una disminución de casi el 4 por ciento respecto del presupuesto de este año. Y aunque los diputados incrementaron en 3,000 millones la asignación para el sector, los recursos son aún insuficientes.

Por si quedaba alguna duda, el secretario de Agricultura tradujo a lenguaje coloquial el mensaje del gobierno: “...los agricultores contarán con un plazo de cinco años para hacerse eficientes y competitivos”, dijo. Y si no lo logran, que se olviden de los subsidios y “mejor que se dediquen a otra cosa... El que no lo entendió, no lo quiso entender... Estamos planteando para los productores de granos y todo tipo de cultivos una disyuntiva: o te vuelves eficiente con los parámetros internacionales o te buscas otra cosa”.

Así, de plano. Con esto, a dos años de asumir la Presidencia, el *gobierno del cambio* retomaba en toda su crudeza los planteamientos mercadócratas de Carlos Salinas, en el sentido de que al campo mexicano le hace falta un laxante poblacional consistente en fuertes dosis de libre mercado. Y como los neoliberales del PRI, Javier Usabiaga –quien por si fuera poco recientemente llamó a *retomar el liberalismo social*– no se preocupa por definir los tales *parámetros internacionales*, que en realidad son precios artificialmente bajos deprimidos por los subsidios. Mucho menos le interesa explicar cuál es la *otra cosa* a la que podrán dedicar-

se los campesinos presuntamente no competitivos, en un país cuya economía no crece y donde la industria despidе trabajadores (Dussel Peters, este volumen; de la Garza Toledo, este volumen).

Y para las cosechas de exportación la receta del funcionario fue la misma:

El caso del café vemos a productores que tienen un cuarto de hectárea del grano, otras tres hectáreas de maíz y de frijol, y de esto y lo otro. No viven del café. A estos productores tenemos que darles un esquema de salida... Y si quieren seguir produciendo (esa superficie de café) hazlo, pero el Estado no tiene por qué compartir contigo. Te vamos a dar uno o dos o tres años, para que veas que ese ingreso es marginal. Pero ya no afectes los intereses del país.

Esto significa enviar por el caño (*darles un esquema de salida*), a unos 300,000 cafecultores minifundistas y de economía diversificada, casi dos millones de mexicanos campesinos que sin duda no viven sólo del café y que en los últimos años han mantenido sus plantaciones con pérdidas. No le preocupó al funcionario que la producción campesina del aromático en pequeñas huertas de montaña sea ambientalmente virtuosa, pues capta lluvia, retiene el suelo, conserva la fertilidad, captura carbono y reproduce la biodiversidad. No le preocupó tampoco, que de este cultivo haya dependido por varias décadas el ingreso monetario de una parte sustantiva de las comunidades campesinas e indígenas del país. No le preocupó, finalmente, que la geografía del café sea también la de los más agudos conflictos sociales y de la guerrilla. Y es que el señor Usabiaga, sólo de producir y vender ajos sabe y no le interesa otra cosa que no sea el mercado. Lo que es muy respetable... sino se tratara del funcionario que tiene a su cargo el destino del México rural.

Cuando los gobiernos de la Unión Europea ponen el acento en las múltiples funciones que la agricultura desempeña, además de producir alimentos, el gobierno de México –un país donde un cuarto de su población depende de la economía rural– quiere dejar atrás, cito de nuevo a Usabiaga, “a una sociedad agraria demandante de recursos fiscales, inconsciente y poco receptiva de los mercados, atenta a buscar mejores ingresos vía presupuestos y no vía productividad” (ésta y las anteriores referencias en la entrevista realizada por Lourdes Edith Rudiño, publicada en *El Financiero*, 21 de noviembre de 2002). Tal es la oferta general agropecuaria del presente gobierno: competir o retirarse.

### **¿Cómo enfrentar al México de la cintura para abajo? El Plan Puebla-Panamá**

La otra se refiere específicamente al México de la cintura para abajo y fue bautizada eufónicamente como Plan Puebla-Panamá. Un programa que apuesta

por una nueva colonización del sur y sureste, favorecida por desregulaciones, incentivos fiscales y obras de infraestructura. Una operación mercadotécnica donde los programas sociales no son más que cortinas de humo declarativas para ocultar la venta de garaje de la mitad feíta del país que aún no ha sido comprada por las transnacionales. En la versión de Santiago Levy, cuya paternidad del programa no ha sido desmentida, la tarea consiste seducir al ahorro externo exhibiendo sin pudores las ventajas comparativas de la región. Lo que traerá inversiones y con ellas crecimiento económico, que es lo que hace falta. Porque, según Levy, actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el problema del sureste no es social, ya que la pobreza y la marginación del sur se resuelven solas gracias al éxodo de los desahuciados, que se van a causar vergüenzas en otra parte. Entonces hay que olvidarse de la pobreza –o dejársela a los programas asistenciales– y promover la inversión a toda costa, sin incómodas preocupaciones societarias. Y si el modelo de crecimiento genera más pobres no importa, ellos solitos se irán a cualquier otro lado.

Es en serio, eso dice Levy. Veamos sino la introducción de *El sur también existe, un ensayo sobre el desarrollo regional de México* que escribió con Enrique Dávila, Georgina Kessel y S. Levy (2000):

Si emigran quienes no encuentran oportunidades de ingreso en una zona, ésta puede tener escaso desarrollo y no tener problemas severos de pobreza. Así, la pobreza extrema rural de regiones rezagadas se convierte en pobreza moderada urbana... Inversamente, la creación de un polo de desarrollo en una región atrasada no resuelve necesariamente sus problemas de pobreza... Por lo anterior, el diseño de políticas públicas para el sureste debe separar los objetivos de combate a la pobreza de los de desarrollo regional...

Plantaciones privadas intensivas y especializadas, corredores comerciales y de servicios que favorezcan el flujo de mercancías entre la costa este norteamericana y el pacífico, maquiladoras, turismo dorado, bioprospección, son algunos de los ejes de un *desarrollo* del que –bien lo dice Levy– no hay que esperar bondades sociales, si acaso lo contrario. Sólo que el PPP ha estado malito. Hasta el 2003, transcurridos más de dos años de su puesta en marcha, poco se había hecho, además de hablar, porque la recesión mundial no favorecía nuevas inversiones sino la retracción de algunas de las que ya estaban ahí, como las plantas de maquila y el turismo, y también porque las finanzas públicas no estaban para derrochar en infraestructura y la magnitud de la deuda desalentaba la contratación de nuevos préstamos en el fondo *ad hoc* que negoció el BID.

## Más allá del globalismo neoliberal

Entonces, ¿la recesión alejó el peligro? No, en lo más mínimo. Lo que pasa es que con o sin Plan Puebla-Panamá, la globalización salvaje sigue su curso depredador de la naturaleza y el hombre. De antiguo en el sur y sureste del país priva un orden injusto y excluyente donde la creciente pobreza es contraparte de la nueva riqueza. Los mesoamericanos vivimos dentro de este orden y padecemos sus crónicas inequidades. Pero el modo de sufrirlas y su intensidad depende de las tendencias y coyunturas propias del corto plazo. Hay periodos de expansión del capital cuando éste se apropia de nuevos espacios, recursos y capacidades, rompiendo equilibrios previos y por lo general incrementando y extendiendo la expoliación y la marginación. Hay también periodos de retracción, cuando las inversiones se estancan o repliegan dejando sin sustento a ciertos sectores que pasan de explotados a excluidos. Dentro de un orden opresivo e inicuo, como el del sureste, tanto la expansión como la retracción son indeseables. Pero es pertinente reconocer que en los últimos años hemos vivido la segunda situación.

El que la retracción o estancamiento transitorios de las nuevas oleadas colonizadoras no acarreen bienes sino males de otro orden –como desempleo en la construcción, en las maquiladoras, en las fincas y en el turismo, además de reducción de la demanda de ciertas materias primas agropecuarias– pone en evidencia que la transnacionalización de Mesoamérica y la globalización, en sentido estricto no pueden evitarse. Y no se pueden impedir, no porque sean fuerzas de la naturaleza, sino simplemente porque ya están aquí, y desde hace mucho. Porque vivimos en ellas, y mientras duren de ellas dependemos para subsistir. Lo que en verdad hace falta no es tanto esforzarse por parar, detener, impedir la llegada de un orden que, bien visto, nos rodea ya por todas partes. Lo necesario, lo urgente, es cambiarle el rumbo al desarrollo, girar las prioridades, voltear la tortilla.

El éxodo masivo y creciente de mexicanos que buscan en el norte un porvenir que en su país los rehúye, es el saldo más ignominioso de la vía de desarrollo adoptada desde los ochenta. Un modelo que nos llevó de la explotación a la exclusión; de un sistema injusto donde los campesinos producían alimentos y materias primas baratos, subsidiando con ello el desarrollo industrial; a un sistema marginador donde los productores nacionales de básicos son arruinados por las importaciones y los agroexportadores por la caída de los precios internacionales. La diáspora que nos aqueja no es una migración que pueda contenerse con métodos represivos, que pueda atajarse neocolonizando el sur, o que pueda atenuarse significativamente capitalizando las remesas, como no la hará remitir el TLCAN, ni la presunta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Todos los días ingresan a los Estados Unidos con la intención de trabajar unos 1,000 o 1,500 mexicanos. Casi uno por minuto. Y viven allá cerca de nueve

millones de personas nacidas en México, algo así como el 10 por ciento de nuestra población total. Antes migraban puros campesinos. Ahora ya no, también va gente de ciudad y bastantes profesionistas. Algunos encuentran empleo urbano en los servicios y las industrias más laboriosas, pero quizá la mitad se incorpora a los *agricultural workers*, entre ellos casi todos los emigrantes de origen campesino y el cuarto de millón de indígenas mexicanos que vive por esos rumbos.

En el arranque del milenio, resulta que un segmento importante del campesinado nacional y una porción significativa de nuestros indios, radican y trabajan del otro lado de la frontera. Y una parte no menos relevante de las comunidades campesinas e indígenas que se quedaron, vive con el alma en un giro, pendiente de las *remesas* que envían los de allá (Cohen, este volumen; Delgado Wise, en este volumen).

México es una nación pluriétnica, pero también un pueblo binacional. Porque, si 10 millones de indios nos hacen multiculturales, 23 millones de compatriotas en Estados Unidos nos vuelven sobradamente multinacionales. Uno de cada cinco mexicanos vive en Estados Unidos y uno de cada dos de los que aún siguen aquí tiene familiares allá. Así, de cada tres mexicanos con empleo uno labora del otro lado. Si a esto agregamos el millón de trabajadores de la maquila, que cobran en pesos pero producen en dólares, y la mayoría de los cuales se agolpa en 30 ciudades de la franja fronteriza, con la mirada puesta en *el gabacho*, tendremos el retrato de un profundo traslape demográfico y laboral; al que se añade el revoltijo de culturas, el entreveramiento de imaginarios.

La mitad de la patria trasterrada la forman nacidos en México, y la mitad de esa mitad son indocumentados. Porque los dueños de la nación vecina no quieren compartirla, pero el trasiego humano legal o ilegal es incontenible. Así, en el último año del milenio pasado emigraron a Estados Unidos 335,000 mexicanos, aunque algunos hablan de medio millón. Y el flujo es creciente, pues en 1980 sólo habían salido 275,000. Con una población así desparramada, no es extraño que cada año se registren unos 300 millones de cruces. Lo sorprendente es que a fuerza de pasar aun no hayan borrado la línea fronteriza. Este vuelco poblacional, esta diáspora incontrolable y creciente, es inédita. En tiempos de grandes convulsiones sociopolíticas, como los 10 años de lucha armada y la primera década de la posrevolución, muchos mexicanos se refugiaron allende la frontera, y para 1930 el 3.73 por ciento de los nacidos en México residía en Estados Unidos. Pero el éxodo disminuyó entre 1940 y 1970, los añorados años del *desarrollo estabilizador*. Las crisis recurrentes del pasado cuarto de siglo agudizaron de nueva cuenta el fenómeno migratorio, y en los últimos tres lustros las políticas de ajuste han sido más efectivas que la mortífera y hambreadora revolución en lo tocante a despertar vocaciones peregrinas: en 1997, 7.75 por ciento de los nacidos en México vivía

en Estados Unidos, mientras que en el arranque del tercer milenio los trasterrados ya son el 10 por ciento. Y la estampida continúa (Delgado Wise, en este volumen).

Hoy más que nunca es necesario demandar el derecho de los mexicanos a la comida y a un trabajo digno (o “decente” como dice la OIT), es decir reivindicar la seguridad alimentaria y la seguridad laboral del país. Y esto no será posible si no rescatamos nuestra hipotecada soberanía. Es necesario que el Estado mexicano recupere y ejerza el derecho de imprimirle a la economía el curso que demanda el bienestar de los ciudadanos, y no el que sacrifica a los ciudadanos a los requerimientos del tianguis global. Aunque tampoco esto es cierto, pues en verdad las políticas públicas neoliberales han estado, y están, al servicio de las grandes corporaciones y no del abstracto mercado (Otero, capítulo 1, en este volumen). Así, mientras que los productores de maíz se arruinan, Maseca, de Roberto González Barrera, se enriquece comprando grano norteamericano por encima de la cuota negociada en el TLCAN; mientras los trigueros truenan, el grupo Bimbo, de Lorenzo Servitje, embarnece gracias a las importaciones subsidiadas; y lo mismo sucede con el grupo Bachoco, de los Robinson Bours, que importa maíz y sorgo sin pago de arancel, por mencionar sólo algunas empresas. A éstas hay que agregar transnacionales como Cargill, que en la práctica controla nuestra producción cerealera; Purina, que opera con insumos pecuarios; Nestlé, que controla regiones lecheras completas, PepsiCo, que es dueña de ingenios; Vecafisa-Volcafé, que compra grandes volúmenes del grano aromático. Y mientras un puñado de corporaciones enriquece, los campesinos se arruinan y los pueblos se quedan solos.

Los trasterrados en Estados Unidos envían 10,000 millones de dólares anuales, casi lo mismo que importamos de ese país en alimentos. Los mismos alimentos que los migrantes campesinos podrían haber cultivado aquí. Pero para eso necesitamos políticas industriales y agrícolas orientadas a la defensa y ampliación de la planta productiva y de los cultivos de interés nacional. Debemos, pues, restablecer la seguridad alimentaria, respaldando a la pequeña y mediana producción campesina y fortaleciendo el mercado interno, tanto nacional como regional y local. Nos hace falta restaurar la seguridad laboral, defendiendo y ampliando la planta fabril y la actividad agropecuaria y mediante la integración de cadenas que potencien nuestras complementariedades productivas.

## Conclusiones

Enmendar el rumbo que ha conducido al agro mexicano a la bancarrota supone una serie de rectificaciones fundamentales. La mayor, enmendar la percepción que los últimos gobiernos han tenido de los pequeños y medianos productores rurales.

Los campesinos son polifónicos. Esto quiere decir que su eficiencia y competitividad no puede juzgarse sólo con base en los productos que lanzan al mercado de manera directa y visible, sino también de una serie de bienes y servicios generados, que si nos circunscribimos al análisis costo/beneficio del sistema producto resultarían externalidades. Estas funciones, poco visibles en óptica estrechamente mercantil, pero muy reales, son de diferente índole y podrían clasificarse en sociales, culturales y ambientales.

#### *Servicios sociales:*

En un país con severos problemas de autosuficiencia, seguridad y soberanía laboral, la economía campesina genera empleos e ingresos a costos sustantivamente menores que la industria y los servicios. Cuando México ha perdido autosuficiencia, seguridad y soberanía en lo tocante a los alimentos, la producción campesina de medios de vida, destinados al mercado nacional o local o de autoconsumo, reduce el riesgo de crisis alimentarias y hambruna. En el contexto de una sociedad rural desintegrada por la falta de opciones y el éxodo, y de un mundo urbano saturado precaristas atendidos a la economía informal parasitaria, la economía doméstica fija a la población y fortalece a la comunidad.

Frente a una actividad económica pulverizada, la producción campesina metadoméstica que combina labores familiares y actividades asociativas, genera economías de escala y refuerza la organicidad como parte del capital social. Cuando la reproducción delincuencia a través del narcocultivo y el narcotráfico deviene estrategia de sobrevivencia generalizada, restaurar la viabilidad de la economía campesina es la forma más barata de combatir al crimen organizado. Dado que en los últimos 30 años la violencia libertaria rural ha sido una constante, intensificada en la última década, habrá que reconocer que la forma menos cruenta y más legítima de “enfriarle el agua a la guerrilla” es fortalecer a la economía campesina, como base y palanca de la dignificación y democratización de la sociedad rural.

#### *Servicios culturales:*

Si la diversidad de culturas autóctonas, migradas y mestizas es uno de los activos del país, y si la matriz originaria de esta pluralidad es casi siempre de carácter rural y comunitario, habrá que reconocer en la economía campesina el sustento económico y societario de nuestra identidad como nación. Cuando los derechos autonómicos y culturales de los pueblos indios se reivindican energicamente, cobra fuerza la funcionalidad de la economía campesina como principal e insoslayable sustento productivo de estos derechos. La restaura-

ción, preservación y desarrollo de las culturas autóctonas, que incluyen los proverbiales productos artesanales, pero también y sobre todo usos y costumbres (lingüísticos, políticos, jurídicos, religiosos, musicales, culinarios, etcétera) así como saberes productivos y prácticas agrícolas a veces ancestrales, sólo serán sustentables si tienen base económica en una producción campesina renovadora de la tradición y fortalecida en el cambio (Otero, capítulo 14, en este volumen).

### *Servicios ambientales:*

En tiempos globales, que evidencian la fragilidad de los ecosistemas de los que depende la vida frente a modelos de producción y consumo destructores del precario equilibrio naturaleza-sociedad, resaltan las virtudes de una economía y una sociedad comunitarias capaces de mantener y desarrollar una relación más armoniosa con el medio ambiente. Si bien algunas prácticas productivas domésticas que fueron sustentables, se pervirtieron o dejaron de serlo debido al crecimiento poblacional y al impacto de paquetes tecnológicos agresivos, no cabe duda que los nuevos paradigmas ambientales –tanto los *grises* que tienen que ver con las tecnologías limpias, como los *verdes* que convocan a no violentar la capacidad de carga de los ecosistemas– están revalorando las virtudes de los aprovechamientos diversificados, del bajo o nulo consumo de agroquímicos y de la producción en pequeña o mediana escala capaz de adecuarse con flexibilidad y eficiencia los diferenciados requerimientos del medio ambiente, es decir que reividican el cambiante pero terco y duradero modelo campesino de producción. Cuando el agua potable, la atmósfera limpia y el suelo fértil devienen recursos naturales escasos y cada vez más valiosos, contra los que atentan los patrones tecnológicos homogeneizantes y la lógica de lucro del capital, es necesario apelar una vez más a una producción campesina por naturaleza diversa y que antepone el bienestar a la ganancia.

Si el siglo XXI ya no será de los petroquímicos sino de las industrias de la vida basadas en la ingeniería genética (actividad decisiva en la producción de alimentos, de medicinas, de cosméticos, etcétera), la biodiversidad, bajo la forma de bancos de germoplasma, deviene el recurso estratégico por excelencia; bien que las transnacionales y sus bioprospectores –con o sin patente de corso– tienden a extraer y patentar, mientras que las comunidades agrarias y los campesinos las preservan, pues en gran medida se trata no de recursos naturales sino del resultado de una ancestral domesticación (Carlsen, en este volumen).

Ciertamente en lo sustancial el mercado no reconoce ni retribuye las múltiples funciones de la economía campesina. Apenas algunos servicios ambien-

tales, como la captura de carbono o la cosecha de agua, han cobrado cierta visibilidad, pero los intentos de cotizar y hacer efectiva su retribución están en pañales. En algunos casos se busca que sean los generadores de externalidades ambientales negativas –las empresas contaminantes– quienes paguen estos servicios. En otras ocasiones los consumidores finales demandantes de productos *orgánicos, verdes, limpios, sustentables*, etcétera, están otorgando un sobreprecio por estos atributos, remuneración adicional que en parte retribuye las virtudes intrínsecas del producto y en parte paga por la presunta amabilidad ambiental de su producción. Finalmente, a través del gasto público, los gobiernos destinan algunos ingresos fiscales a objetivos ambientales, entre los que eventualmente se incluye el apoyo a los campesinos que desarrollan prácticas sustentables. Sin embargo, ni el incipiente mercado de servicios ambientales, ni el módico consumo de productos ecológicos, ni el parco gasto público destinado a respaldar la pequeña producción sustentable, retribuyen significativamente funciones socioambientales decisivas prestadas por la economía campesina.

Identificar estos servicios múltiples y establecer mecanismos para cuantificarlos y ponerles precio, es el primer paso. Pero lograr su retribución no será fácil, pues aunque parezca un asunto de mercado, en el fondo el reconocimiento de la multifuncionalidad sociocultural y ecológica de la producción campesina violenta los principios del mercantilismo absoluto, un sistema que no le concede valor de cambio, bienes sociales, culturales y ambientales que no puedan ser privatizados y por tanto objeto de lucro. Plantear que la sociedad debe retribuir el fortalecimiento de valores como la equidad, la armonía y la diversidad cultural, o que debe pagar por la preservación y restauración de los recursos naturales y la biodiversidad, bienes que se reivindican como colectivos y no privatizables, es un hueso duro de roer para los integristas de la libre competencia. Sin embargo es una lucha que ya se está dando y que no puede abandonarse, pues en ella no sólo se juega la sobrevivencia de los campesinos, sino también el futuro de la humanidad. Afortunadamente, las evidencias de que se avecina una catástrofe ecológica generalizada y los síntomas de que el mundo campesino y la marginalidad urbana de origen rural están a punto de estallar, han dado visibilidad a las virtudes de la pequeña y mediana producción sustentable. Es necesario, ahora, profundizar en este incipiente reconocimiento e instrumentar su justa retribución.

Por algunas décadas, se reivindicó el derecho de los campesinos a existir, alegando que podían ser tan “eficientes” como los empresarios. Batalla perdida, pues en términos de rendimientos técnicos directos y de rentabilidad económica estrecha, la brecha entre la agricultura doméstica pequeña o mediana y la privada, se ha venido ensanchando; tanto así que para algunos los campe-

sinos ya son una clase innecesaria y prescindible cuya creciente exclusión es tan inevitable como necesaria. Hoy la batalla debe replantearse: quizá los productores domésticos no son tan eficientes como los empresarios del campo, si los medimos con los parámetros de la empresa privada, pero sin duda lo son infinitamente más si ponderamos su impacto social y ambiental, rubros donde los agroempresarios de plano salen reprobados.